

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Alicja Sosnowska

Demandada: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Walbrzychu

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Interpretación de los artículos 5 CE, párrafo tercero, y 2 de la Directiva 67/227/CEE del Consejo, de 11 de abril de 1967, Primera Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios (DO 71, p. 1301; EE 09/01, p. 3), así como de los artículos 18, apartado 4, y 27, apartado 1, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Normativa nacional en materia del impuesto sobre el volumen de negocios en la que se establecen, respecto al plazo de devolución del excedente, modalidades menos favorables para los sujetos pasivos que inician operaciones sujetas a impuestos y que están registrados como sujetos pasivos que llevan a cabo entregas intracomunitarias — Principios de neutralidad fiscal y de proporcionalidad

Fallo

- 1) El artículo 18, apartado 4, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, según su modificación por la Directiva 2005/92/CE del Consejo, de 12 de diciembre de 2005, y el principio de proporcionalidad se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que, a fin de permitir los controles necesarios para evitar la evasión y los fraudes fiscales, amplía de 60 a 180 días, a contar desde la presentación de la declaración del impuesto sobre el valor añadido por el sujeto pasivo, el plazo del que dispone la Administración fiscal nacional para devolver a una categoría de sujetos pasivos el excedente del impuesto sobre el valor añadido, salvo si éstos constituyen una garantía por importe de 250 000 PLN.
- 2) Disposiciones como las controvertidas en el litigio principal no constituyen «medidas especiales de inaplicación» tendentes a evitar determinados fraudes o evasiones fiscales en el sentido del artículo 27, apartado 1, de la Directiva 77/388, en su versión modificada por la Directiva 2005/92.

(¹) DO C 69 de 24.3.2008.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de agosto de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d'appel de Montpellier — Francia) — Proceso de extradición seguido contra Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea

(Asunto C-296/08 PPU) (¹)

(Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión marco 2002/584/JAI — Artículos 31 y 32 — Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros — Posibilidad de que el Estado de ejecución de una solicitud de extradición aplique un convenio adoptado antes del 1 de enero de 2004, pero que no ha sido aplicable en dicho Estado hasta una fecha posterior)

(2008/C 260/05)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d'appel de Montpellier

Parte en el proceso principal

Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea.

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Cour d'appel de Montpellier (Francia) — Interpretación de los artículos 31 y 32 de la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190, p. 1) — Facultad de un Estado miembro de utilizar, en sus relaciones con otro Estado miembro, procedimientos distintos de los previstos en la Decisión marco y, en particular, los previstos por el Convenio de Dublín, de 27 de septiembre de 1996, relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea — Incidencia de la falta de notificación, por parte del Estado que emite la orden de detención, de los acuerdos y convenios existentes que desea continuar aplicando — Posibilidad de que el Estado de ejecución de la orden de detención aplique un convenio adoptado antes del 1 de enero de 2004, pero que entró en vigor en dicho Estado con posterioridad a aquella fecha.

Fallo

- 1) El artículo 31 de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, debe interpretarse en el sentido de que sólo se refiere al supuesto en que el régimen de orden de detención europea es aplicable, lo que no ocurre cuando una solicitud de extradición se refiere a actos cometidos antes de una fecha indicada por un Estado miembro en una declaración efectuada al amparo del artículo 32 de dicha Decisión marco.

2) El artículo 32 de la Decisión marco 2002/584 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro de ejecución aplique el Convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, establecido por acto del Consejo de 27 de septiembre de 1996 y firmado en la misma fecha por todos los Estados miembros, aun cuando el inicio de la aplicación de este Convenio en dicho Estado miembro sea posterior al 1 de enero de 2004.

(¹) DO C 223 de 30.8.2008.

Recurso de casación interpuesto el 27 de junio de 2008 por el Landtag Schleswig-Holstein contra el auto dictado el 3 de abril de 2008 en el asunto T-236/06, Landtag Schleswig-Holstein/Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto C-281/08 P)

(2008/C 260/06)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Landtag Schleswig-Holstein (representante: S. Laskowski, profesora, y J. Caspar, catedrático)

Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas

Pretensiones de la parte recurrente

- Que se acuerde la admisión del recurso y se declare fundado.
- Que se anule el auto de del Tribunal de Primera Instancia de 3 de abril de 2008.
- Que se estimen las pretensiones formuladas en primera instancia por la demandante y se declare admisible y fundado el recurso en el asunto T-236/06.
- Subsidiariamente, que se devuelvan los autos al Tribunal de Primera Instancia para que éste admita el recurso inicial y prosiga la tramitación del procedimiento.
- Que se resuelva sobre las costas y se condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas del presente procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

El Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del recurso de nulidad interpuesto por la demandante contra la Comisión de las Comunidades Europeas porque la demandante no es una persona jurídica a los efectos del artículo 230 CE, párrafo cuarto. El recurso de nulidad se dirige contra la las decisiones de la Comisión de 10 de marzo y de 23 de junio de 2006, por las que se denegó a la demandante el acceso al documento SEC(2005) 420, que contiene un análisis jurídico del proyecto de Decisión marco, en discusión en el Consejo, sobre la conservación de los datos tratados y almacenados a efectos de la prevención, investigación, descubrimiento y represión de la

delincuencia y las infracciones penales, con inclusión del terrorismo.

Como fundamento de su recurso contra el auto del Tribunal de Primera Instancia impugnado, la recurrente alega dos motivos de recurso.

En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia ha violado el principio de respeto del derecho de defensa. Este principio, como expresión de la garantía de un juicio justo y de una tutela judicial efectiva, tiene por objeto, en particular, evitar que la resolución judicial se vea posiblemente influida por una alegación que no pudo ser discutida entre las partes. Mediante él se pretende evitar una decisión sorpresiva. Para evitarla el Tribunal de Primera Instancia debería haber dado a la demandante ocasión de aclarar el extremo.

En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia ha infringido el Derecho comunitario, al interpretar incorrectamente el requisito de «persona jurídica» a los efectos del artículo 230 CE, párrafo cuarto y negar a la demandante la calidad de persona jurídica y su consiguiente legitimación procesal.

El Tribunal de Primera Instancia se basó en que, en el marco de sus competencias de representación procesal, el presidente del Landtag Schleswig-Holstein no representaba a la demandante, sino «directamente, al Land», motivo por el cual la demandante no tenía capacidad jurídica y, por tanto, tampoco capacidad procesal ante los tribunales comunitarios. De ello cabe inferir que el Tribunal de Primera Instancia habría acordado la admisibilidad del recurso si el escrito de interposición de recurso hubiera designado como demandante al «Land Schleswig-Holstein», en lugar de a la demandante. Este criterio no es sólo jurídicamente erróneo, puesto que no concuerda con la constitución del Land Schleswig-Holstein, sino que, en opinión de la recurrente, constituye una resolución sorpresiva puesto que la demandante no tenía que contar con ello. El auto del Tribunal de Primera Instancia incurre en error jurídico en primer lugar porque no tuvo en cuenta que, según la constitución del Land Schleswig-Holstein, el Landtag es el «órgano supremo elegido por el pueblo para la formación de su voluntad política», y, en segundo lugar, porque el Tribunal de Primera Instancia no se percató de que el Landtagspräsident representa al Landtag en todos los litigios constitucionales que afecten a éste. El concepto de «Land» se utiliza de manera jurídicamente global y no específica y, dependiendo del contexto normativo, puede referirse tanto al Gobierno como al Parlamento del Land.

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Mons (Bélgica) el 14 de julio de 2008 — Société de Gestion Industrielle (SGI)/État belge

(Asunto C-311/08)

(2008/C 260/07)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de première instance de Mons